

Los *think tanks* de la derecha en tiempos de crisis

Mireya Dávila¹

El estallido social de octubre del año pasado y la posterior crisis sanitaria han tensionado al sistema político chileno. La intensidad de la crisis ha obligado a los diferentes sectores políticos a posicionarse respecto a la protesta, la violencia, la conducción del gobierno, las iniciativas del Congreso y, posteriormente, los efectos de la pandemia. Esto ha sido especialmente complejo para la derecha agrupada en ChileVamos, pues, como coalición de gobierno, deben enfrentar la demanda ciudadana, responder a quienes representan y, al mismo tiempo, apoyar o tomar distancia de las decisiones de un gobierno con muy poco apoyo, especialmente en su propio sector.² Los *think tanks* de la derecha han reaccionado coincidiendo en aquel aspecto esencial de la derecha, que es el orden y la crítica a la izquierda por avalar la violencia. Los matices se han centrado en las causas del estallido social, y en la relevancia que tienen la política y la economía en la crisis. En cuanto a la pandemia, las diferencias se han centrado en el mayor o menor apoyo al gobierno, especialmente en materia de las políticas de ayuda económica y social.

Los *think tanks* se han convertido en actores en la discusión de los asuntos públicos no solo en Chile, sino en las democracias contemporáneas en general (Gárate, 2008), influyendo en las decisiones de políticas públicas a través de diferentes vías (Moreno, 2015; Stone, 2006). En Chile existe un conjunto de centros de estudios de derecha que, con diferentes recursos, nivel técnico y productos, difieren en su función (asesoría partidaria, producción para-académica), forma

1 Doctora en Ciencia Política. Profesora asistente en el Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. En este trabajo colaboró recopilando información Andrés Contreras, a quien agradezco.

2 Según la encuesta de Critería de junio, el 48% de las personas encuestadas que se consideraba de derecha apoyaba al gobierno. Este porcentaje es menor al 60% declarado en mayo.

de incidir en su propio sector y en la opinión pública (publicaciones propias y columnas de opinión en la prensa), y fortaleza organizacional (tipo de organización y recursos). Desde su posición, han formulado críticas y propuestas respecto a diversos temas de políticas públicas; y últimamente, desde la crisis del año pasado, frente a la coyuntura del plebiscito de octubre, el proceso de cambio constitucional y la crisis económica y social como consecuencia de la emergencia sanitaria.³ Su rol político ha crecido en la medida en que, producto de las crisis anteriores, la administración de Sebastián Piñera no ha podido reencontrarse con su propuesta programática original, por lo que el “relato” del gobierno se ha convertido en espacio de confrontación ideológica al interior de su coalición. Las pequeñas y grandes diferencias de opinión y análisis entre estas organizaciones muestran el largo camino que aún deben recorrer para alcanzar un diagnóstico y una estrategia de salida compartida.⁴

1 Los *think tanks* de la derecha en Chile

Los primeros centros de estudios independientes fueron creados en dictadura, principalmente vinculados a la oposición.⁵ En 1980 se creó el Centro de Estudios Públicos (CEP), primer *think tank* de derecha, y actualmente existen once de tales instituciones. Al igual que en otros países, estos centros varían en términos de estructura organizacional, recursos, tipos de vínculos con partidos y formatos o productos de incidencia.⁶ Cubren todo el espectro político de la derecha política partidaria, incluida la extrema, con Acción Republicana e Ideas Republicanas, centros vinculados al Partido creado por José Antonio Kast.

Como señalamos, el primero fue el CEP, fundado en 1980 por empresarios y sectores de la derecha. La segunda oleada se produjo durante la transición a la democracia, con la creación del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) y el Instituto Libertad (IL), ambos en 1990; y el año siguiente, la Fundación Jaime Guzmán (FJG). Los dos primeros vinculados a los partidos de derecha nacidos en dictadura, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), respectivamente. El tercero fue creado después del asesinato de Jaime Guzmán, en 1991. La tercera oleada de *think tanks* de derecha comenzó

3 Los argumentos y opiniones de los *think tanks* y sus miembros se obtuvieron de dos fuentes: páginas webs de cada organización y columnas de opinión. Véase detalles en Referencias.

4 Esta falta de relato ha sido destacada incluso por miembros de su sector, como Daniel Mansuy (IES).

5 Después del golpe militar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), fundada en 1957, continuó funcionando, pero en 1974 trasladó su secretaría general fuera de Chile y en 1978 el Estado chileno se retiró del acuerdo intergubernamental, perdiendo la personalidad jurídica. La Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan), ex Centro de Estudios de Planificación Nacional (Ceplan) de la P. Universidad Católica de Chile, fue creado en 1976; y el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) en 1980, entre otros.

6 No consideramos en este análisis a la Fundación Paz Ciudadana, ya que es una organización dedicada a políticas específicas en materia de seguridad pública.

quince años después, con la creación, el año 2006, del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). La segunda década del siglo XXI trajo otro conjunto de centros de estudios en el sector: IdeaPaís (2010), Instituto Horizontal (2011), Instituto Res Pública (2011), Fundación para el Progreso (FPP) (2012) y Fundación Avanza Chile (2014).⁷ Ideas Republicanas fue creado en 2019, mismo año en que se formalizó el partido que dirige José Antonio Kast.⁸ Los *think tanks* creados en las últimas décadas tienen naturaleza diferente: mientras el IES, IdeaPaís y Res Pública tienen un carácter más académico, independiente de partidos políticos, Horizontal e Ideas Republicanas están vinculados más directamente con ellos, el primero con Evópoli y el segundo con el Partido Republicano de José Antonio Kast. La FPP tiene una lógica de vinculación más directa con sectores empresariales, como la familia Ibáñez, y un carácter menos académico que IdeaPaís y Res Pública. Finalmente, AvanzaChile fue una organización creada al alero del actual presidente Piñera, con el objetivo de reunir a excolaboradores y posteriormente organizar su segunda campaña presidencial.

Desde el punto de vista de sus declaraciones de principios, objetivos, misión y visión, siete de los once *thinks tanks*⁹ señalados aspiran a contribuir a una sociedad libre, principio esencial para la derecha chilena. El IES menciona el servicio a la sociedad sobre la base, entre otros, de la subsidiariedad. El Instituto Horizontal, del cual el ministro de Hacienda Ignacio Briones es *past president*, añade la creencia en una sociedad de oportunidades y la necesidad de fomentar la responsabilidad individual. Tanto la FJG como IdeaPaís mencionan tener inspiración cristiana, la primera, y socialcristiana, la segunda. Otros agregan la palabra ‘solidaridad’ y varios ‘democracia’. Ninguno la palabra ‘igualdad’.

Desde el punto de vista de la organización, si bien hay variación en cuanto su tamaño, todos poseen consejo directivo o directorio, dirección ejecutiva e investigadores.¹⁰ Además, tanto las y los investigadores como las y los miembros de directorio expresan su opinión sobre la coyuntura a través de la prensa. Parte de quienes integran el directorio o el equipo de estos centros tienen una posición de incidencia en los medios de comunicación escritos; es el caso de Lucía Santa Cruz, Luis Larraín y Natalia González de LyD, y Daniel Mansuy del IES, entre otros.

7 Esta fundación fue creada para cobijar al equipo de trabajo del entonces expresidente Piñera y preparar la segunda campaña presidencial. Desde 2018 no tiene funcionamiento.

8 Cabe señalar que en el directorio de la FGJ sigue apareciendo José Antonio Kast.

9 El análisis considera solo 10 *think tanks*, pues el Instituto Res Pública tiene su página web en mantenimiento. Solo se analizará en este documento la opinión de sus miembros aparecida en la prensa.

10 La FPP es la única que tiene también presencia regional, en Concepción y Valparaíso.

En los directorios o consejos directivos se observa los grupos o actores que concurren con recursos y trayectorias a darle su carácter específico a cada *think tank*. Las redes se componen de empresarios, universidades (mayoritariamente la Universidad del Desarrollo, UDD; la Universidad Adolfo Ibáñez, UAI; la Universidad de los Andes y la P. Universidad Católica de Chile, PUC), conocidos estudios jurídicos y miembros tanto de ambos gobiernos como de la dictadura (LyD y FJG).¹¹ Algunas empresas tienen representación en más de un directorio, como Inversiones Pathfinder.¹² El centro de estudios Ideas Republicanas está integrado por varios miembros que antes se desempeñaron en la FJG y exdiputados UDI, como Rojo Edwards. El directorio del Instituto Libertad está integrado mayoritariamente por militantes de RN, como el actual intendente de Santiago, Felipe Guevara, y el excanciller Teodoro Ribera. Lo mismo sucede con Horizontal, en el cual el directorio está integrado por una militante de ese partido y por el ministro Briones (Evópoli). Varios de los miembros de directorios pertenecen a Icare (Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas) y a la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril). Los grandes grupos empresariales como Luskic, Angelini, Von Appen, Matte, Yarur y Solari tienen presencia en varios de los directorios de los *think tanks*. El CEP es uno de los *think tanks* con un directorio más numeroso y con amplia presencia empresarial, como Angelini, Said y Matte.

Desde el punto de vista del financiamiento, en general, este es opaco: “en Chile poseen el status de instituciones privadas sin fines de lucro por lo que no están obligadas a hacer públicos sus balances y por lo tanto se dispone únicamente de la información que entregan voluntariamente” (Gárate, 2008, p. 8). De la poca información pública al respecto, se sabe que LyD recibe aportes de unas 500 personas naturales y cerca de 200 empresas. El presidente del directorio, Luis Larraín, señaló que no existe un vínculo especial con la UDI, si bien asesora a parlamentarios de *ChileVamos*. Sin embargo, en un informe de la Biblioteca del Congreso se vincula a la FJG y LyD con la UDI y al Instituto Libertad con RN, respectivamente (BCN, 2019). Por su parte, Axel Kaiser, a cargo de la FPP, señala que este centro de estudios es financiado por más de 50 donantes, entre los que se encuentra Nicolás Ibáñez.

Finalmente, en el Global Index establecido por la organización *To Go Think Tanks*, los únicos *think tanks* chilenos que aparecen son de derecha: CEP en el

11 Integran el directorio de LyD: Carlos Cáceres y Hernán Büchi, ambos ministros de Hacienda de Pinochet; Hernán Felipe Errázuriz, que fue canciller y presidente del Banco Central, entre otros cargos; Pablo Inhen y Jorge Selume fueron directores de Presupuestos; y Sebastián Bernstein presidió la Comisión Nacional de Energía (CNE). En la FJG participan Jovino Novoa, que fue ministro de Pinochet. Además, participa el núcleo original de la UDI, como el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

12 El dueño de Pathfinder es Juan Obach, presidente del directorio del CEP. www.litoralpress.cl, 18/12/2018.

puesto 109 y LyD en el 111. En el *ranking* por países Chile ocupa el puesto número 22, junto a Colombia e Irán.¹³

2 Los *think tanks* en tiempos de crisis: el estallido del 18 de octubre

Frente a la crisis, los *think tanks* de este sector se pronunciaron profusamente en sus páginas web y a través de la prensa. Los principales temas que concentraron la atención fueron el orden, la violencia, las causas del estallido, el efecto en la economía y el rediseño institucional que significó el acuerdo de noviembre, así como la reacción del gobierno y la propia derecha ante esta crisis.

2.1 Democracia, violencia y orden

Los *think tanks* del sector reaccionaron criticando la violencia y la responsabilidad de la izquierda en ella y la incapacidad del gobierno para restablecer el orden y el Estado de Derecho. Plantearon la necesidad de que la democracia procesara las demandas sociales.

El valor de la política: Para el CEP, la centralidad del análisis está en la política. La crisis era, además de social, política, por lo que su solución tenía que venir de ese ámbito. En octubre, Leonidas Montes, director ejecutivo del CEP, reflexionaba en relación con que el progreso es más que el PIB per cápita y que el problema era de empatía con los problemas sociales: “El progreso, bien lo sabemos, es más complejo que el PIB per cápita. En cierto sentido nos quedamos solo con el Adam Smith de la *Riqueza de las Naciones*, y todavía no hemos visto la importancia de su *Teoría de los Sentimientos Morales*”, aludiendo a la necesidad de incorporar más elementos en el análisis que solo los económicos. Para Montes, también la crisis era de autoridad, siendo necesario proteger la democracia. Silvia Eyzaguirre complementó el diagnóstico de la relevancia de la política señalando que el estallido social evidenció la falta de amistad cívica. Distinguió la quema del metro y los saqueos de la insatisfacción expresada en marchas pacíficas y cacerolazos. Planteó la necesidad de un diálogo nacional que diera cauce institucional a las demandas, pues son las instituciones democráticas las que tienen legitimidad y facultad para satisfacerlas. Coincidió con lo anterior Lucas Sierra, quien planteó —además de coincidir en mejorar la institucionalidad democrática— la necesidad de rediseñar el sistema político para avanzar hacia uno semipresidencial. Por su parte, Isabel Aninat, miembro de la Mesa Técnica que discutió la propuesta de reforma constitucional, señaló

13 Para 2019, esta organización contabilizó un total de 8248 *think tanks* a nivel mundial. La región con mayor número es Europa con 2219, seguido de América del Norte con 2058, Asia con 1829, América Central y Sur con 1023; y finalmente África Subsahariana con 612, y Oriente Medio y África del Norte con 507. Véase J. G. McGann, “2019 Global Go To Think Tank Index Report” (2020), *TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports*. 17. https://repository.upenn.edu/think_tanks/17

que los partidos eran los que debían condensar las demandas y transformarlas en discusión pública. Por el contrario, Ideas Republicanas criticó que los partidos respondieran a los problemas con demagogia y populismo, dañando la democracia al criticar la consulta municipal realizada por los alcaldes a fines del año pasado, pues —en su opinión— los plebiscitos dañan la democracia representativa y se les asocia con gobiernos autoritarios.

Sistema político: Otro aspecto destacado por varios autores fue la autonomía de la protesta social respecto de organizaciones de intermediación política. El CEP caracterizó la protesta como una sin partidos ni organización. Para Leónidas Montes, “son demandas individuales, esparcidas en multitudes” que exponen a los ciudadanos a un síndrome anárquico. Añadió que se debía asegurar el Estado de Derecho, la vida de las personas y la propiedad pública y privada. Silvia Eyzaguirre añadió que este tipo de movilizaciones sin liderazgo ni agenda era similar a lo que sucedía en otros países. En Chile, la rabia y frustración de los jóvenes era por la incapacidad de progresar. La encuesta CEP (diciembre de 2019) demostró una crítica al Estado y a las instituciones, no al gobierno. Desde el IES, Pablo Ortúzar coincidió en que la principal característica de la protesta era el desorden, que no había petitorio, orgánica ni líderes. Coincidió con Montes en que no se podía hablar de una masa, sino de individuos. Acción Republicana responsabilizó a la “izquierda ideológica” de pretender interpretar esta protesta social sin ideología ni organización ofreciendo una Asamblea Constituyente. Para este *think tank*, los problemas no se solucionarán sumando más derechos sociales a la Constitución, como según él lo planteaba la izquierda. Estas asambleas, para AR, no respetaban el ritmo de la democracia. Para Claudio Alvarado (IES), la ambigüedad de la oposición con respecto a la violencia también era una variable que socavaba las bases de la legitimidad policial.

Vale la pena mencionar también que el último libro del exinvestigador del IES y actual profesor de la UDP, Hugo Herrera (2019), sobre el estallido social planteó que desde la perspectiva de la teoría política ya se sabía que el pueblo no era una sola cosa, un objeto determinable, sino más bien un “acontecimiento”, en el sentido de que es mucho más dinámico e inatrapable que un objeto, con límites difusos.

Respecto a los problemas propios del sistema político, LyD criticó el rol del Congreso como iniciador de proyectos que constitucionalmente eran prerrogativa del Ejecutivo. Bettina Horst añadió, al comentar la acusación constitucional y posterior destitución del ministro del Interior, Andrés Chadwick, que esta era una derrota para la política, pues la acusación solo se había ocupado para dañar al adversario. El ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, sostuvo que si Chadwick era responsable de algo, fue de no

haber tenido el apoyo político necesario para que las fuerzas de orden actuaran eficazmente. Claudio Alvarado (IES) sostuvo que el Congreso tiene tensiones propias, que el reformismo llegó tarde frente al ímpetu revolucionario y la elite horadó su legitimidad con casos de corrupción, por lo que son necesarias reformas eficaces, pero también simbólicas, como la reducción de la dieta parlamentaria.

La izquierda y la violencia: LyD enfatizó el tema del orden y responsabilizó, al igual que AR, a la izquierda. Planteó que si se estableciera un pacto para salir de la crisis, este debía incluir límites a la protesta social y la legitimidad de las formas para ejercerla. Natalia González (LyD) coincidió en que sin orden público no se podía avanzar y que Chile estaba preso de la violencia. Al igual que AR, criticó a la izquierda, al Frente Amplio, por su validación de la violencia para conseguir objetivos. Coincidió con esto Lucía Santa Cruz, consejera de LyD, quien sostuvo que la violencia era inaceptable y que la izquierda radical legitimaba la desobediencia civil. En una carta publicada el 15 de noviembre de 2019 y suscrita por Santa Cruz, Luis Larraín y otros 20 firmantes,¹⁴ se declaró la preocupación por que grupos anarquistas coordinados se “habían prácticamente tomado Chile”. Criticaron al Estado por su incapacidad para mantener la seguridad interna. Añadieron que los casos aislados de violaciones a los derechos humanos aumentaban el conflicto. Afirmaron que “sin seguridad interna no hay democracia”. Luis Larraín, exdirector ejecutivo de LyD, criticó el que los estudiantes fueran intocables y los calificó de extremistas de la política. Fue más allá y responsabilizó a todo el sistema político por la violencia y la ausencia de poder.

Para Lucía Santa Cruz (LyD), los derechos y libertades individuales no pueden someterse a las demandas de la colectividad, ni menos se justifica la violencia “para alcanzar el paraíso en la tierra”. Añadió que lo que se buscaba era destruir el capitalismo, la propiedad privada y la democracia representativa, y que era necesario establecer consensos mínimos y tener disposición a buscar acuerdos. En el IES, Mansuy postuló que, en el caso de Chile, la protesta fue dando un giro a la violencia y esto hizo que se perdiera la responsabilidad personal en la masa. Sostuvo que la izquierda justificaba las protestas, porque miraba con nostalgia esa forma de expresión: “Es una idea semirreligiosa de que un día el pueblo se alzaría contra todas las injusticias”. Similar relación entre la violencia e izquierda fue señalada por Fundación para el Progreso. Al respecto, Jorge Gómez afirmó que una parte de la izquierda estaba por subvertir todo el orden y hacer imperar el poder popular sin límites.

14 Alejandro Barros, Raphael Bergoeing, Andrea Butelmann, Carlos Castro, Beatriz Corbo, Rafael del Campo, Francisca Dussaillant, Javier Etcheberry, Pablo González, María Paz Hermosilla, Ignacio Irarrázaval, Sebastián Izquierdo, Ramiro Mendoza, Leonidas Montes, Claudio Mundi, Rafael Pastor, Claudio Pizarro, Roy Rogers, Alfie Ulloa, Salvador Valdés y Mario Waissbluth.

Para LyD el derecho a protesta tiene límites, pues es ilegítimo protestar si se destruye el país y se afecta la economía. En este sentido se mostraron a favor de la ley antisaqueos. Estimaron que la legislación contenía herramientas para ejercer la autoridad, aunque esto podía llevar el riesgo de violar los derechos humanos. Validaron la aplicación del Estado de Catástrofe, necesario para proteger la paz social. En la FPP, Trevia sostuvo que la democracia estaba en jaque, situación con la que concordó Juan Lagos, quien añadió que la democracia estaba limitada por la violencia y que la muerte de la democracia comenzaba por la tolerancia de las autoridades a la violencia. La pérdida del monopolio de la fuerza era un síntoma del quiebre de la democracia. Claudio Alvarado (IES) argumentó que la relación entre el poder civil y las instituciones se deterioró progresivamente a niveles insostenibles y que había un problema con la legitimidad en la acción de Carabineros. Preciso que la ambigüedad de la oposición con respecto a la violencia también era una variable que socavaba las bases de la legitimidad policial, añadiendo que acabar con la violencia era una condición de posibilidad para reponer el orden público.

Crítica al gobierno y a la derecha política: Como se observa en los argumentos planteados por los *think tanks*, hay una crítica al gobierno por la conducción de la crisis debido a su incapacidad para restablecer el orden. A juicio de Larraín (LyD), el gobierno había cedido mucho a la izquierda, alejándose de su ideario, y que se estaba en un momento de debilidad democrática pues se legitimaba la violencia como herramienta de acción política. Natalia González argumentó que el gobierno no había logrado detener el desorden público, lo cual se agravaba porque el Congreso tampoco apoyaba al Ejecutivo en materia de orden. Incluso, Hernán Felipe Errázuriz, exministro de Pinochet y miembro del directorio de LyD, agregó que con el estallido social se habían fortalecido los narcos, pues habían aumentado su control del territorio en las poblaciones. Era urgente combatir el poder de los narcos.

No solo el gobierno tenía responsabilidad. Acción Republicana enfatizó que, si bien el estallido de octubre fue llamado por la izquierda ideológica, también fue avalado por parte de la derecha. Para AR, la paz social se acabó porque el presidente Piñera no había ocupado el uso legítimo del monopolio de la fuerza. Este *think tank* enfatizó que, por culpa de la incapacidad del gobierno de garantizar orden y seguridad, muchos chilenos habían perdido sus empleos tras el caos sembrado por los violentistas.

LyD señaló que si bien valoraba el acuerdo de la clase política de noviembre, lo que preocupaba era la persistencia de la violencia. Para LyD, el orden público seguía siendo el talón de Aquiles del gobierno: “El Estado aún no es capaz de restablecer el orden público ni el Estado de Derecho, esencial para el normal desenvolvimiento de los actores en democracia”. La violencia con-

dicionaba el crecimiento económico: “Evidentemente, ni la política fiscal ni la política monetaria expansiva serán suficientes para retomar una trayectoria de crecimiento tendencial hasta que la violencia cese y la confianza retorne a consumidores e inversionistas”.

Como vemos, los *think tanks* de la derecha responsabilizaron a la izquierda por el desorden y la violencia. La restitución del orden era condición necesaria para salir de la crisis, lo que el gobierno no había logrado.

2.2 Las causas del estallido

Junto con la reacción ante la protesta social y violencia, estos *think tanks* reflexionaron sobre las causas del estallido formulando diferentes interpretaciones centradas en la incapacidad política de la elite, la desigualdad, la incapacidad estatal y causas económicas.

La desigualdad: Para José Joaquín Brunner, miembro del directorio del CEP, el malestar se explicó principalmente por la desigualdad. A diferencia de Leonidas Montes, para quien la solución era política, Brunner planteó la necesidad de lograr un pacto social que supiera el fracaso del pacto democrático. Eyzaquirre (CEP) sostuvo que no era cierto que Chile fuera desigual en términos absolutos; sí lo era en comparación con los países desarrollados, pero no respecto a América Latina. Como es usual en la derecha, planteó que la focalización hacia los más pobres debía funcionar mejor y dejar de someterse a los grupos de presión. Brunner agregó que “la calle” aspiraba a un mejor Estado de bienestar, “un programa socialdemócrata en la medida de lo posible”. No es anomia ni leviatán dictatorial, sino una normalidad que permita el cambio y la adaptación.

Desde el Instituto Libertad, Díaz y Zechetto afirmaron que el estallido tenía causas profundas radicadas en la desigualdad, abuso e indiferencia de la clase dirigente hacia las grandes mayorías. Para estos autores, la distribución del ingreso es vergonzosa y esta era la crisis más importante desde el retorno a la democracia.

Si bien no es un *think tank*, vale la pena destacar el primer libro del sello editorial Ediciones Democracia y Libertad —*El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad* (2020)—, liderado por Valentina Verbal, Benjamín Ugalde y Felipe Schwember y que presenta la reflexión de diferentes académicos sobre el estallido social. En su capítulo, Verbal planteó la incapacidad de la derecha para entender que el problema no era la pobreza, sino la desigualdad. Esto se añadiría a otros dos problemas que hacen incapaz a la derecha para levantar un relato que le permita ganar elecciones y la próxima generación: su desconocimiento de la historia y del sentido profundo de la libertad económica. En la presentación de este primer libro se señaló que la crisis del año

pasado mostró una escalada de violencia que era necesario abordar desde una reflexión de la derecha liberal. En el artículo de la propia Verbal se pregunta por qué la derecha criticó la forma, pero no el fondo de la protesta, de alguna forma legitimándola. Criticó que algunos intelectuales de derecha, como Mansuy y Herrera, se plegaran a la Concertación en un diagnóstico crítico y moralizador del modelo a partir de la movilización estudiantil de 2011.

La crisis de la modernidad: Para Pablo Valderrama, de *IdeaPaís*, la desigualdad social se vincula con la brecha entre quienes tienen inseguridades y los líderes políticos. La solución a la crisis es que la política vuelva a su rol mediador de las tensiones de la modernidad, para lo cual el gobierno debería presentar reformas simbólicas y medidas sociales efectivas orientadas a mejorar la legitimidad del sistema político. Valderrama afirmó que el común de los ciudadanos no buscaba quitar a los más ricos sus bienes materiales, sino deslegitimar las diferencias sociales que se producían como consecuencia de la desigualdad. También fue crítico del gobierno por su demora en ofrecer una hoja de ruta: “El problema es que hoy ya parece evidente que la política está pagando caro el precio de la demora”. Juan Lindh también destacó la necesidad de establecer acuerdos y Andrés Berg señaló que “el malestar social estaba marcado por una sensación de abandono e inseguridad que, a primera vista, tenía, además de una dimensión política, una económica”.

Aldo Mascareño (CEP) complementó el argumento de la modernidad mencionado por *IdeaPaís* agregando que “una de las causas del estallido es que la rapidez de la modernización no ha permitido que esta llegue de igual manera a todos. Las causas del estallido son múltiples: salud, educación, endeudamiento, abusos, colusiones. Esto ha minado de a poco ese pacto social que se establecía, donde tenía que haber una regulación del orden social”. Añade que era preciso hacer un ajuste institucional —un nuevo pacto— del modelo liberal, si no se quiere que este sea cuestionado. En la FPP, el exministro Mauricio Rojas sostuvo que no era el modelo lo que había fracasado, sino que la “centroderecha miope”, incapaz de liderar transformaciones que el actual modelo exitoso hacía necesarias. Para Rojas había un vacío de representación de las elites, pues en la medida en que el bienestar aumentaba, las sociedades se movían de valores materialistas a valores posmaterialistas referidos a la buena vida y la autorrealización personal.

La incapacidad de la política y la necesidad de acuerdos: También se argumentó un déficit político para resolver los problemas y, por ende, la necesidad de establecer acuerdos (p.e. Brunner). Jaime Lindh señaló: “Estas semanas han revelado algo, según mi parecer, tanto o más inquietante: la vulnerabilidad de nuestro sistema político para llegar a acuerdos”. Añadió al respecto: “Cuidar la capacidad de nuestro sistema para llegar a consensos debiese ser una máxima

que todos debemos respaldar. Después de todo, sin equilibrios políticos, no hay avance económico ni social que sea duradero”.

Similar posición respecto al tema simbólico fue planteada por LyD, al sostener que “no es temerario afirmar que un equivocado rol de la tecnocracia y un déficit en la construcción de símbolos que acompañen a las diferentes tareas, proyectos y anuncios, contribuyeron a encender la mecha del 18-O.” Para LyD, la tecnocracia no tiene la práctica política para establecer símbolos y un lenguaje que requiere la política.

La FPP profundizó en el tema de la desconexión de la elite política como una causa relevante para entender el estallido. La crisis es grave, pero no es ni del Estado ni del régimen político. Señala al respecto:

... lo que al parecer se cuestiona es la noción de abuso y privilegio respecto a diversos ámbitos de la vida social, política y económica de los chilenos. Hasta ahora, las reclamaciones han apuntado esencialmente a la clase política, lo que no implica que no exista una crítica abierta a las élites en general. (...) a este contexto debemos sumar los niveles de desafección política y desconfianza generalizada, que parecen acrecentar el descontento ciudadano. En ese sentido, esto parece ser una explosión inorgánica, producto de una diversidad de demandas desarticuladas, relacionadas con distintos aspectos de la vida de las personas (acceso a salud, pensiones, ingresos, oportunidades) en las cuales hay una lectura común: existen inequidades. (FPP, “Chile: ¿viaje de ida o vuelta? Crónica de una crisis institucional”, oct. 2019)

Esteban Montoya (FPP) argumentó que la elite política y empresarial postergó las legítimas demandas de una ciudadanía abandonada. Jorge Gómez sostuvo que había una crisis de intermediación política. Más del 70% no se identifica con la derecha ni con la izquierda. Esto abre el espacio para que llegue un líder populista.

Ataque al Estado: Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal, planteó cómo conciliar las necesidades de la ciudadanía con el adecuado uso de los recursos públicos. Destacó que el estallido social se debe al malestar por la desigualdad en el acceso a las oportunidades y la escasa legitimidad de las instituciones estatales. El Estado aparece como ineficiente para repartir equitativamente la provisión de los bienes públicos a nivel local. Esta incapacidad limita el crecimiento económico y la movilidad social. Coincidió en la necesidad de un acuerdo nacional transversal que implique diversas acciones concretas, reflejadas en el presupuesto nacional. Se debe mejorar el uso de los recursos sin aumentar impuestos ni los niveles de deuda pública. Se debe afrontar la modernización del Estado, ya que hay una crisis de confianza en las instituciones fundamentales de la democracia, que da cuenta de un malestar generalizado, lo que es producto “de la falta de respuestas a distintos requerimientos

esenciales, que tienen directa relación con la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida”.

En el Instituto Libertad, Díaz y Zechetto plantearon un argumento similar a Horizontal, al responsabilizar a la mala reputación de las instituciones del Estado, que no solo no cumplen con lo que espera de ellas la ciudadanía, sino que también muestran acciones poco honestas e incluso corruptas. Se debe reformar el Estado con el objetivo de que funcione orientado a resultados, sea transparente, participativo y efectivamente descentralizado. Se debe contar con un Estado en red, con funcionarios de calidad. María Paz Arzola (LyD) sostuvo que junto al gasto público que contribuye a reducir la desigualdad, falta un mayor aporte de legisladores y funcionarios públicos más orientados a mejorar su trabajo. Arzola añadió que, junto con aumentar el gasto público, se debía mejorar su calidad para hacerlo más eficaz en reducir la desigualdad.

En defensa del modelo de mercado: Para la FJG, la explicación a la crisis política y social en Chile era económica y se centró en que “todos los aspectos en los que la ciudadanía ha manifestado reparo, son aquellos espacios donde el mercado no opera correctamente al no tener competencia que perfeccione el servicio y baje los precios: electricidad, agua, transporte, autopistas y otros”. En ese sentido —señala—, el cambio pasa por incentivar la competencia en el mercado más que desbaratarlo. Sostiene, al igual que otros *think tanks* como LyD, que se requiere “un Estado más eficiente y robusto —no más grande— que haga posible estos avances”.¹⁵ Para LyD, al igual que la FJG, las causas del estallido eran económicas. El problema no era la desigualdad, la cual sí ha disminuido desde el 2000, sino el insuficiente crecimiento económico de los últimos cinco años.

LyD sostuvo que a Chile le ha ido bien con el modelo. Para Natalia González, la tesis del pesimismo y el descontento con el modelo no se relaciona con la evidencia. Más aún, esta visión desprecia el avance en materia de aumento del ingreso. Criticó a aquellos sectores políticos con discursos maximalistas de cambio del modelo cuando eso no es lo que quiere la ciudadanía. Hernán Büchi argumentó que no es cierto que Chile no haya mejorado, pues la evidencia sugiere que sí ha disminuido la diferencia con los países desarrollados. Si bien el progreso ha llegado a las mayorías, se necesita mayor gasto.

Frente a la agenda social propuesta por el gobierno, LyD señaló que “no hay duda que la correcta focalización del gasto público es una de las vías por las cuales el Estado puede aportar a la reducción de la desigualdad”. LyD mencionó su preocupación por el gasto fiscal, la incertidumbre con respecto al es-

15 FJG, *Mirada Política*, n° 1935 (octubre 2019), p. 7. https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2019/10/MP_1935_crisis.pdf

cenario macroeconómico y por el aumento de la deuda pública. Añadió que el efecto del estallido en la actividad económica pudo ser peor de lo que se esperaba por los sectores de la construcción e industria manufacturera.

Una mirada más de mediano plazo, pero vinculada a la necesidad de más mercado, fue la planteada por Axel Kaiser (FPP) al responsabilizar a las reformas tributarias, laboral y educacional de Bachelet por la situación del país, que el gobierno actual no había sido capaz de revertir. Hernán Büchi (LyD) coincidió con responsabilizar al gobierno de Bachelet por el estancamiento de la economía, lo que afectaba las expectativas de la gente. Luis Larraín (LyD) señaló que Chile había crecido exponencialmente en los últimos 30 años, por lo que la frase “no son 30 pesos, son 30 años” no era correcta. Los culpables eran más bien los últimos cinco años, pues el gobierno anterior no creció como debía.

Como se observa, los *think tanks* de derecha ofrecen diversas explicaciones, no todas coincidentes, sobre las causas del estallido: desigualdad; incapacidad de la conducción política de la elite; incapacidad del Estado, y las tensiones propias de la modernidad.

2.3 *Cambio constitucional*

El cambio constitucional producto del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre fue visto como una claudicación de la derecha ante la violencia, la mantención de la incertidumbre y su efecto en la economía.

El acuerdo constitucional como derrota de la derecha: Divergiendo de otros en su sector, Daniel Mansuy (IES) planteó que se tenía que aceptar que la Constitución de 1980 tenía un pecado de origen y que, si bien el pacto de la transición dio estabilidad en tiempos complejos, a largo plazo sus consecuencias han sido negativas, pues la izquierda ha perdido el sentido de la responsabilidad y la derecha la vocación política. Añadió que “el FA debe dejar el lirismo adolescente”. Coincide con Verbal (2020) en que la derecha debe asumir una vocación de mayoría que hace tiempo no tiene. En una dura crítica a su sector, Mansuy opinó que el oficialismo se estaba inclinando por el rechazo, pues cuando parte de este sector suscribió al acuerdo del 15 de noviembre, lo hizo por miedo. Pensaron que o era el cambio constitucional o el sistema se desplomaba. Para Mansuy, la violencia estuvo en el origen de este proceso político. Ante la pregunta respecto de si la derecha atravesaba la peor crisis de los últimos años, agregó: “Yo creo que la entrega de la Constitución —en noviembre pasado— fue más fuerte para la derecha que todo esto que está pasando ahora. Sin ninguna duda, ahí había algo simbólico muy fuerte. Yo leo esta crisis como una continuidad de aquello”. Para Mansuy, esta crisis ha representado una derrota cultural de la derecha. Añadió una crítica al gobierno por la falta de proyecto:

Cuando digo que el gobierno no estaba preparado, me refiero a que en una parte de la derecha predominó la idea de que Bachelet 2 era un mal sueño y que bastaba con que el país volviera a crecer. Esa es la deficiencia grave que existe: se excluyó de antemano que en Chile pudiera haber tensiones sociales y políticas profundas. Y eso es lo que quedó al descampado cuando estalló la crisis. (*The Clinic*, 15/07/2020)

Lo innecesario de una nueva Constitución: Para Hernán Büchi (LyD), si un cambio en esta regla fundamental no soluciona los problemas, sí lo hace la creación de más y mejores bienes y servicios que sean accesibles. Bettina Horst coincidió en que una Constitución no era la solución a todos los problemas, y el hecho de que se demandara mejor salud, como decían las encuestas, era para capturar el Estado. Luis Larraín planteó que la incertidumbre creada por el proceso constituyente también dañaba la economía, pues no solo serían dos años de incertidumbre, sino que también implicaría mucho mayor gasto. Coincidieron con el argumento de la incertidumbre Díaz y Zechetto, del Instituto Libertad. Desde el CEP, Rodrigo Vergara planteó que durante dos años el debate constitucional también generaría volatilidad en los mercados.

Procedimiento y tipo de Constitución: Desde la FPP, Esteban Montoya planteó que como las constituciones limitan el poder, en vez de garantizar algo “máximo” se debía proponer una Constitución mínima. Además, como mencionamos anteriormente, se criticó la posibilidad de que fuera una asamblea constituyente el órgano de diseño de la nueva Constitución. LyD coincidió en que los cambios constitucionales debían darse en las instituciones y no en las asambleas. Además, el cambio de la Constitución no resolvía muchas de las urgencias sociales, además de debilitar la institucionalidad al quitarle relevancia al Congreso.

En cuanto al establecimiento de cuotas para el futuro proceso constituyente, Larraín (LyD) argumentó que dicho mecanismo desvirtuaba la democracia representativa, ya que se establecía el corporativismo al permitir la representación de grupos específicos. LyD, al igual que la UDI, se opuso a la paridad, a cuotas indígenas e independientes: “Estos proyectos —salvando en lo referente a las listas de independientes—, vulneran los pilares que sustentan la democracia. La democracia es un sistema cuya premisa principal es la igualdad de todas las personas”. Similar posición tuvo Acción Republicana, pues rechaza que el sexo y la raza sean fuente de perjuicio o beneficios. Las cuotas son un ejemplo de discriminación arbitraria, aunque la izquierda ideológica diga que es una “discriminación positiva”.

Respecto a una nueva Constitución, LyD señaló que una hoja en blanco no solucionaba los problemas; por el contrario,

podríamos afectar la institucionalidad al dismantelar un andamiaje sólido y congruente entre sus principios, valores, derechos y deberes que ha traído progreso y estabilidad y que, aún hoy con las deficiencias, puede aportar desde la legalidad a la solución de las justas demandas sociales. (FJG, *Ideas & Propuestas*, n° 286, 18/12/2019)

Se criticó la idea de establecer derechos constitucionalmente, como lo han hecho otros países de la región. LyD explicó que los casos como Bolivia, Colombia y Venezuela demostraban que estos cambios constitucionales no habían cumplido las expectativas, provocando mayor inestabilidad y crisis. Añadió:

...un cambio de modelo de desarrollo económico y social que puede llevar a nuestro país a sistemas probadamente ineficientes, entregándole al Estado -hoy interdicto- un protagonismo que atenta contra la libertad creadora de todos sus ciudadanos. Por ello, entregar en blanco las instituciones que hoy contiene nuestra Constitución, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional, arriesgan la estabilidad económica y política que tanto progreso han traído al país. (FJM, *Ideas & Propuestas*, n° 289, 29/01/2020)

LyD agregó que el reemplazo del Estado subsidiario por uno que garantizara derechos era inviable, por el endeudamiento que implicaba: “Los derechos sociales dependen de la situación financiera de los estados”. Idéntico argumento fue planteado por la FPP. Juan Lagos argumentó que las demandas sociales no se solucionaban cambiando la Constitución y que tales demandas dependían de las condiciones económicas del Estado y de una práctica política eficiente. Que una Constitución estableciera los derechos sociales no los hacía más plausibles. José Luis Trevia agregó que la Constitución debía regular el poder político, que debía ser minimalista, y que era la llamada a zanjar las disputas sociales.

Acción Republicana rechazó una nueva Constitución. Su director, el ex-diputado Rojo Edwards, lanzó en marzo de este año una campaña contra el Apruebo. El argumento es que un cambio constitucional implica volver al sub-desarrollo. Para este centro, lo que la gente quiere no es una nueva Constitución, sino que vuelva el Estado de derecho. Los argumentos para el Rechazo son: los méritos de la actual, pues da libertades y limita eficientemente el poder del Estado y es mejor económicamente; se necesitan reformas no refundaciones; la Constitución no satisface las demandas sociales; es mejor una Constitución desarrollada durante treinta años a una hecha a la rápida en doce meses; y, finalmente, el origen ilegítimo del acuerdo constitucional, porque fue hecho en un contexto de violencia.

Es posible evidenciar que, ante el desorden y la violencia, los *think tanks* de la derecha exigieron que el gobierno impusiera el Estado de derecho. Perci-

bieron una amenaza a la democracia. Las causas del estallido son económicas para unos, políticas para otros. La incapacidad del Estado también se advirtió como una de las causas. La defensa del modelo también se manifestó en la necesidad de profundizar la economía de mercado.

3 Los *think tanks* y la crisis sanitaria

A diferencia del estallido social, en que las posiciones de los centros de estudios se refirieron a temas vinculados a la democracia, a las causas del estallido, al modelo de desarrollo, en el caso de la pandemia los *think tanks* se centraron en el apoyo al gobierno y su evaluación de las medidas económicas implementadas por este. La crítica a la izquierda se fundamentó en la demanda de este sector político por aumentar el gasto público para ir en apoyo de los sectores perjudicados por la crisis económica derivada de la sanitaria.

3.1 El comienzo de la pandemia

En general, los *think tanks* de la derecha tendieron a apoyar el manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno, si bien plantearon orientaciones para su mejoramiento, especialmente en materia de prevención y trazabilidad.

Las políticas del gobierno: El CEP argumentó la necesidad de mejorar algunas políticas en materia de control de la pandemia. Por ejemplo, en abril sostuvo que era necesaria la adecuada vigilancia y detección de casos, para así poder lograr la mayor cantidad de trazabilidad posible. Al igual que el Colegio Médico y la comunidad científica, planteó la necesidad de mejorar la mala información sobre los datos. También adhirió a la recomendación de expertos en cuanto a implementar cuarentenas cortas, mejorar información a la población y dar contención a los equipos de salud.

En marzo, LyD señaló que la tasa de contagio en Chile había sido menor que en otros países debido a que las medidas anticipadas por el gobierno habían contribuido a aplanar la curva. Estimaron que la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe era necesaria, siempre que se resguardaran los derechos de las personas y que solo se restringieran los derechos de reunión, locomoción y propiedad. Por su parte, Lucía Santa Cruz (LyD) valoró que la conducción de la crisis sanitaria estuviera en manos de expertos en salud pública y que no se centrara en populistas. En cuanto a la libertad individual, era clave que sus restricciones fueran las mínimas posibles y que solo se justificaban por la necesidad de cooperación. Respecto a lo mismo, la FJG comentó que esperaba que las restricciones no produjeran mayores problemas que aquellos que se buscaba solucionar.

Por su parte, Horizontal planteó un enfoque técnico en la materia, al establecer un Comité Asesor COVID-19. En minuta del 26 de marzo, los doctores

Said, Terán y Álamos apoyaron las medidas del gobierno, que a su juicio iban en la dirección correcta, ya que el incremento de contagios se había detenido. Francisca Dussaillant señaló que, si bien se estaba actuando bien en materia de medidas para controlar la pandemia, era necesario que el gobierno desarrollara una política agresiva de prevención. Agregó la necesidad de realizar testeos masivos y gratuitos, y las consiguientes medidas de cuarentena para las personas contagiadas y sus contactos.

En marzo, la FJG señaló que las encuestas daban cuenta de que, a pesar de todo, el gobierno había logrado manejar bien la crisis sanitaria, aunque todavía había problemas en el manejo comunicacional y en otras políticas. Por ejemplo, se debía considerar la realidad laboral de los chilenos y, tal vez, avanzar hacia la flexibilidad laboral en el sector privado. Dos meses después, la Fundación señalaba que el nivel de contagios era más alto que en otros países, pero que el número de testeos era superior y el número de fallecidos muy bajo:

Con todo, el trabajo realizado hasta ahora por el gobierno en su conjunto, y particularmente por el ministro de Salud Jaime Mañalich, dan cuenta (de acuerdo a las diferentes cifras que permiten evaluar el estado de la crisis) de que el gobierno se preparó con tiempo para recibir la pandemia, y también de que la estrategia seguida hasta hoy ha sido efectiva. Es necesario reconocer los aciertos pues, no debemos olvidar que las presiones y críticas recibidas desde el inicio de la epidemia por parte de la oposición y algunas organizaciones cooptadas por la izquierda no se midieron en aspereza, como tampoco en descriterio. (FJG, *Ideas & Propuestas*, n° 296, 06/05/2020)

El manejo político del gobierno: En mayo, Daniel Mansuy (IES) señaló que, a diferencia del proceso constituyente, en que el gobierno había perdido toda capacidad de protagonismo, en el caso de la pandemia había podido retomar algo del control perdido cuando decidió postergar el plebiscito para octubre. Criticando una vez más a la izquierda, Mansuy señalaba que el gobierno debía considerar los objetivos de la centroizquierda si pretendía:

horadar progresivamente el equilibrio institucional establecido en la Carta Magna (que todos se comprometieron a respetar en el acuerdo del 15 de noviembre), con el fin de tener una mejor posición negociadora de cara a la eventual nueva Constitución (...) no hay líderes, no hay ideas, no hay ninguna articulación política digna de ese nombre, pero sí hay una voluntad férrea que busca debilitar la institución presidencial —de allí los reclamos de Ricardo Lagos, que algo entiende de esto—. Es la vieja fronda de los partidos que aspira a una maniobra extraordinariamente hábil: utilizar en su favor toda la rabia acumulada contra la clase política. Nadie sabe para quién trabaja. (*El Mercurio*, 03/05/2020)

Recuperación económica: Se planteó la necesidad de resguardar el equilibrio fiscal. El CEP propuso que lo clave era el desarrollo de políticas macroeconó-

micas financieras para las personas —créditos y subsidios a bajos ingresos— y a las empresas que quebraran. Desestimó el argumento de que la ayuda fiscal era insuficiente, pues había que considerar el nivel de endeudamiento fiscal. Si no se hacía, el problema podía ser peor que la crisis causada por la pandemia. Este argumento fue similar al usado respecto a las políticas del gobierno frente al estallido social.

Ante el paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno en marzo, LyD planteó que ellas aumentaban el déficit fiscal, por lo que era urgente reasignar gasto considerando que los ahorros y capacidad de endeudamiento del Fisco estaban al límite. Para este *think tank*, el *shock* producido por la pandemia era transitorio. Ahora, esto, sumado a la violencia del estallido y *shocks* externos, haría que el crecimiento de 2020 fuera casi nulo. Debido al efecto de la pandemia en el trabajo, apenas se diera una mejoría en los datos sería necesario definir una política para la apertura gradual, y así recuperar el empleo.

En abril, el director ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo, planteó que la contracción económica global y nacional afectaría a las pequeñas y medianas empresas, que no tenían el respaldo financiero necesario, y que, eventualmente, podría pasar lo mismo con las grandes empresas, quedando el Estado como único capaz de proveer el financiamiento necesario. Este rescate tendría, además, consecuencias sociales graves. Como ya lo han mencionado otros miembros de estos *think tanks*, se destacó la importancia de focalizar bien las políticas de ayuda. Se agregó que era necesario ir en ayuda de los trabajadores informales.

Ante la sugerencia de fijar precios en productos muy demandados, dada la pandemia, LyD señaló que la evidencia sostenía que, independientemente del motivo, esta medida generaría desabastecimiento y precios más altos incluso en el mercado negro. Añadía que “el rol del Estado debe centrarse en generar las condiciones para que haya disponibilidad de los bienes y servicios en el mercado, apoyando a aquellos sectores que por sus propios medios eventualmente no pueden acceder por el aumento de precios”. En cuanto a la propuesta de suspender los pagos en educación superior, LyD se opuso, considerando que los aranceles son la principal fuente de financiamiento de las instituciones respectivas.

LyD criticó algunas mociones propuestas para paliar efectos negativos de la pandemia. La FJG criticó la iniciativa parlamentaria que buscaba evitar la suspensión de servicios básicos, pues, a su juicio, faltaba análisis técnico. Para la FJG, por entendible que sea el rol de una oposición, la crisis debe apelar a la unidad y evitar personalismos políticos.

3.2 La explosión de la pandemia

A partir del recrudecimiento de la pandemia, los *think tanks* de derecha apoyaron la política del gobierno en materia económica, se preocuparon por el excesivo gasto fiscal y criticaron el retiro del 10% de las AFP.

Buenas políticas del gobierno en materia económica: LyD señaló que el problema no era de acceso a los planes del gobierno, sino la insuficiente cobertura de beneficios según ingresos previos a la pandemia:

el 64,5% de los hogares de clase media-baja posee contrato de trabajo y/o boleta, por lo que pueden acogerse a los beneficios de protección del empleo. El 35,2% restante depende de ingresos exclusivamente informales por lo que califica para el Ingreso Familiar de Emergencia. Asimismo, un porcentaje mayoritario de la clase media-media puede acceder a los beneficios para ingresos formales (77,2%) y el resto al Ingreso Familiar de Emergencia. En tanto, quienes sí es probable se encuentren más descubiertos es la porción minoritaria de hogares de ingresos medio-altos y altos que se encontraban en informalidad...la propuesta de crédito blando presentada por el Gobierno constituye una buena manera de complementar los beneficios ya existentes y ayudar todavía más a la clase media. (*Temas Públicos*, n° 1455-1, 10/07/ 2020)

Respecto al plan económico del gobierno, FJG planteó que:

estamos en presencia de un plan económico de emergencia que se diferencia de otros planes por la dimensión de sus montos, los que lo dejan muy bien posicionado si es que se le compara con otras experiencias pasadas, con otros países de la región en la actual pandemia o incluso con otros países del mundo. (FJG, *Mirada Política*, n° 2018, mayo 2020)

Para la FJG, el balance de este plan era positivo, porque mira a la sociedad en conjunto al proveer protección al trabajador, a su familia y al empleador; es el Estado al servicio de la persona y no al revés —se expresa en cantidad de recursos y endeudamiento público—; es un diseño armónico, pues va en ayuda de diversos requerimientos, como los de trabajadores informales, trabajadores independientes y pymes; se aplica a partir de principios de focalización, flexibilidad y personalidad; y es responsable fiscalmente.

La FJG también apoyó las otras propuestas del gobierno en la materia:

El Gobierno ha generado una serie de mecanismos de protección social a propósito de la emergencia sanitaria, económica y social del COVID-19. El Ingreso Familiar de Emergencia se constituye en un mecanismo fundamental de protección social ante la caída de los ingresos que han sufrido los trabajadores. Este beneficio, junto a la ley de protección del empleo y el beneficio a independientes a honorarios crea una verdadera red de

protección para paliar —en lo que es posible para el Estado— las negativas consecuencias económicas de la pandemia. (FJG, *Mirada Política*, n° 2025, 24/06/2020)

Respaldo al ministro Mañalich: En coordinación con exministros y militantes de partidos de gobierno, miembros de los *think tanks* del sector firmaron una carta en apoyo al ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuya salida se convirtió en la única posibilidad para descomprimir la crítica a la conducción del gobierno en materia de la crisis sanitaria. La carta fue firmada por personas vinculadas a LyD (como los exministros Chadwick y Cubillos) y la FPP (como el exministro Gerardo Varela).

Política de coalición, el retiro del 10% de las AFP y el cambio constitucional: Los *think tanks* de derecha se opusieron al retiro del 10% de las AFP como medida de apoyo por la pandemia. LyD estimó que afectaría las pensiones futuras, que el costo fiscal sextuplicaría los recursos destinados a hogares de menores ingresos a través del Programa Ingreso Familiar de Emergencia. Como alternativa postuló el uso del Fondo de Cesantía, pues este cuenta con alrededor de 14.000 millones de dólares. Además, el proyecto de ley que amplía los beneficios de este seguro debía discutirse con rapidez en el Congreso.

Lucía Santa Cruz vinculó esta ley con la viabilidad de la propia coalición. Para la consejera de LyD, este podía ser el comienzo de la estatización de las pensiones y de la economía chilena. Planteó que lo sucedido en el Congreso le había hecho entrar en un periodo de reflexión respecto al cambio constitucional. En una columna escrita por Sebastián Izquierdo (IdeaPaís) y Marcela Cubillos (LyD), publicada en diferentes medios, miembros de la Red de Centros de Estudios defendieron la propuesta del gobierno para la clase media y calificaron el retiro del 10% como mala idea: “Es necesario que el debate sobre la protección social en contextos de crisis sea llevado a cabo a partir de los instrumentos diseñados para ello. En ese sentido, más que promover el retiro de los ahorros previsionales, es necesario perfeccionar las medidas propuestas por el Gobierno”.

La FJG y los presos de Punta Peuco: Esta Fundación apoyó la decisión del gobierno de incluir a los condenados por violaciones a los DDHH en el indulto general del gobierno destinado a conmutar penas bajas por arresto domiciliario en casos de personas de riesgo de COVID-19, pues si bien dichos condenados estaban excluidos de ser indultados dada la culpa por la que habían sido castigados, sí podían recibir el beneficio por ser mayores de 75 años.

Rechazo al impuesto a los “súper ricos”: Recientemente la FJG también se opuso a este impuesto, planteado por la oposición como forma de generar mayores recursos para el apoyo en respuesta a la crisis sanitaria y económica.

En suma, las opiniones de los *think tanks* de derecha van en apoyo a las medidas del gobierno, pero resguardando los recursos del fisco y de las AFP —mejorando la focalización—, así como los de los sectores más ricos del país.

4 Conclusiones

Los *think tanks* de la derecha reaccionaron frente al estallido social, sus causas, consecuencias y acciones del gobierno. Lo mismo sucedió con la crisis sanitaria. La posición unánime fue la reafirmación de la importancia del orden, del Estado de derecho como condición necesaria para salir de la crisis. También la mirada individual a los problemas públicos y a la visión negativa de la elite política.

Es posible observar diferentes posiciones de los *think tanks* respecto de las principales cuatro causas del estallido: la desigualdad, especialmente la política; tensiones de la modernización; capacidad estatal; e incapacidad del gobierno para profundizar el modelo y retrotraer las malas políticas del gobierno de Bachelet.

Coinciden en una fuerte crítica a la izquierda, apoyada en distintas razones: que dicho segmento político auspicia, o al menos no condena la violencia; propone como solución el asambleísmo constituyente y otras prácticas populistas; quiere establecer una Constitución plagada de derechos que no conducen al resultado esperado; y usa el Congreso como plataforma para plantear políticas inadecuadas que no respetan la preponderancia del Ejecutivo.

Igualmente, defienden el modelo de desarrollo en términos de crecimiento económico y modernización. La gente no quiere, según estos centros, acabar con el capitalismo, sino mejorar su funcionamiento.

Criticar el cambio constitucional, no solo porque es costoso y profundiza la crisis económica por la incertidumbre, sino también porque no es cierto que una nueva Constitución solucione los problemas existentes.

En materia de la crisis sanitaria, los centros de estudios apoyan o al menos no critican el desempeño del gobierno. Sí les preocupan las políticas en materia económica para enfrentar la pandemia, en especial el excesivo gasto fiscal y endeudamiento del Estado. También se responsabiliza a la izquierda de la continua demanda por mayores recursos.

Finalmente, desde el punto de vista de la relación de los *think tanks* con la derecha política y el gobierno, es posible apreciar, en cuanto al estallido social, una crítica a la incapacidad del gobierno de mantener el orden público y defender el modelo. El resto de la crítica a la conducción política se centra en general en la incapacidad de la elite política para procesar las demandas ciudadanas. En cuanto al cambio constitucional, plantean que este fue realizado

en una situación de miedo, y que la derecha fue débil al aceptarlo. Se inclinan por la mantención del orden constitucional vigente, cuyo cambio no sería necesario.

Este conjunto de convergencias y divergencias analíticas y programáticas no permiten pensar que, a través de estas dos crisis, la sanitaria y la económica, los *think tanks* de la derecha y sus audiencias hayan logrado construir un discurso sólido. El proceso constituyente les ofrecerá una nueva oportunidad.

Referencias

FUENTES PRIMARIAS: Revisadas entre el 16 de octubre de 2019 y 30 de julio de 2020.

PÁGINAS WEB: Las páginas consultadas para elaborar este ensayo fueron:

- Avanza Chile: www.avanzachile.cl
- Centro de Estudios Públicos: www.cepchile.cl
- Fundación Jaime Guzmán: fguzman.cl
- Fundación para el Progreso: www.fppchile.cl
- IdeaPaís: www.ideapais.cl
- Ideas Republicanas: ideasrepublicanas.cl
- Instituto Estudios de la Sociedad: www.ieschile.cl
- Instituto Libertad: www.institutolibertad.cl
- Instituto Libertad y Desarrollo: www.lyd.org
- Horizontal: www.horizontalchile.cl
- Res Pública: www.respublica.cl

PRENSA: Se buscó miembros investigadores y miembros del directorio de los *think tanks* analizados. La prensa consultada incluyó: *Diario Financiero*, *El Libero*, *El Mercurio*, *La Segunda*, *La Tercera*, *Publimetro*, *Revista Capital*, *Teletrece*, *The Clinic*, *24 Horas*.

FUENTES SECUNDARIAS:

Fundación Jaime Guzmán. *La insurrección chilena. Desde la mirada de la Fundación Jaime Guzmán*. Santiago: Editorial JGE, 2020. <https://bit.ly/3cUAx5y>

Gárate, M. "Think Tanks y Centros de Estudio. Los nuevos mecanismos de influencia política en el Chile post-autoritario". En: Maite de Cea, Paola Díaz y Géraldine Kerneur (eds.), *Chile: ¿De país modelado a país modelo? Una mirada sobre la política, lo social y la economía* (pp. 67-85). Santiago: LOM Ediciones, 2008.

Herrera, H. *Octubre en Chile. Acontecimiento y comprensión política: hacia un republicanismo popular*. Santiago: Editorial Katankura, 2019.

Moreno, M. "Think tanks en Chile: estilos y prácticas tecnocráticas en la formación de políticas". *Revista Enfoques*, [S.l.], vol. 8, no. 12 (2015), 103-125. <https://revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno/article/view/155/133>.

Pinilla, J. "Think Tanks, saber experto y formación de agenda política en el Chile actual". *Polis*, vol. 11, no. 32 (2012), 119-140. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682012000200008>

- Pinilla, J. P. y F. Godoy. "Las formas organizacionales del conocimiento experto. Think tanks y política en el Chile actual". Congreso *Produciendo Lo Social: Una Mirada Reflexiva a las Ciencias Sociales en Chile y América Latina*, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales, 25 de octubre de 2010, Santiago de Chile.
- Stone, D. (1996). *Capturing the political imagination: Think tanks and the policy process*. Londres: Frank Cass.
- Ugalde, B., F. Schwember y V. Verbal (eds.). *El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad*. Santiago: Ediciones Democracia y Libertad, 2020.
- Vargas, A. "Regulación a los think tanks de partidos políticos. Alcances del concepto y funcionamiento aplicado en Chile". Asesoría Técnica Parlamentaria. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), 2019. <https://bit.ly/2Q8bP7C>